

Madrid, 25 de febrero de 2026

La aceptación social es una condición indispensable para el despliegue renovable

La sede de EDP en Madrid acogió el seminario “Aceptación social de proyectos renovables: Estrategias de creación de valor compartido”, organizado conjuntamente por Funseam y EDP. La jornada analizó en profundidad las causas del creciente rechazo ciudadano a las nuevas infraestructuras energéticas y sirvió para debatir soluciones basadas en el diálogo temprano, la transparencia y el retorno socioeconómico real.

El despliegue de las energías renovables se enfrenta a un obstáculo que trasciende la viabilidad técnica, económica o regulatoria: la oposición social en el territorio. Esta fue la principal premisa de la jornada celebrada en Madrid, que reunió a investigadores, promotores y a las principales asociaciones del sector energético español para trazar una hoja de ruta frente al fenómeno del NIMBY, acrónimo de *Not in my backyard* (No en mi patio trasero).

La apertura institucional corrió a cargo de Manuel Menéndez, presidente de EDP, que subrayó que el sector debe entender bien la raíz del problema frente a la oposición ciudadana: "Cuando hay dificultades para la aceptación social de los proyectos de renovables es porque algo no estamos haciendo bien y porque posiblemente pasamos por alto cosas que son más importantes de lo que a veces pensamos". Menéndez remarcó la apuesta de la empresa por las renovables, que hoy suponen prácticamente el 100% de su negocio y advirtió que, aunque la tecnología y la regulación son muy importantes "si no hay aceptación social ahí donde estamos, pues difícilmente vamos a hacer bien las cosas y vamos a poder hacer proyectos a largo plazo y sostenibles", por lo que este factor resulta vital para la compañía.

Por su parte, el director general de Funseam, Joan Batalla, destacó la urgencia de incorporar la licencia social en las fases más tempranas del desarrollo empresarial: "Si algo ha quedado claro en los últimos años es que la licencia legal sin duda es una condición necesaria pero no suficiente" y reclamó que los proyectos se desarrollen "con criterio, con rigor, con transparencia, con diálogo y, lo que es más importante, con voluntad de retorno para el territorio". Asimismo, enmarcó la jornada en la misión de Funseam de fomentar el debate riguroso para "contribuir a la búsqueda de soluciones" y confirmó que la aceptación social formará parte estratégica de las líneas de trabajo e investigación de la Fundación.

El estudio de Orkestra

El bloque central de la jornada contó con la intervención de Stephanía Mosquera, investigadora senior en el Energy Lab de Orkestra (Instituto Vasco de Competitividad). Mosquera presentó un exhaustivo análisis sobre las barreras y determinantes de la aceptación social, recordando que el lema “renovables sí, pero no así” ha permeado profundamente en la sociedad.

La investigadora enmarcó el problema en el concepto de “justicia energética”, que implica ofrecer a la ciudadanía oportunidades de participación en la toma de decisiones, repartir equitativamente los beneficios y los costes que cada proyecto implica para la comunidad, y atender a los grupos vulnerables. Según detalló, el rechazo no es un simple capricho estético, sino un cálculo de bienestar: “La aceptación social de una nueva infraestructura ocurre cuando los aspectos del proyecto que disminuyen el bienestar se equilibran con los aspectos que lo aumentan”.

Mosquera advirtió que los promotores suelen dejar los beneficios “a elección y voluntarios”, mientras que los costes (impacto paisajístico, ruido, molestias) son percibidos como fijos e inevitables por la población local. Ante este escenario, propuso un *checklist*, de buenas prácticas, que incluye investigar exhaustivamente el contexto local antes de actuar, fomentar la “propiedad psicológica” del proyecto, logrando que la comunidad lo sienta como suyo aunque no tenga participación financiera, y establecer canales de comunicación bidireccionales y operativos durante toda la vida útil de la instalación.

El punto de vista del sector

La jornada continuó con una mesa redonda con representantes de las principales patronales energéticas del país, que desgranaron los obstáculos técnicos y regulatorios que retroalimentan el rechazo ciudadano y qué herramientas están desplegando para mitigarlo.

Moderó la mesa **Alberto González Salas**, socio del área de regulación de **Deloitte**, quien destacó la dificultad del reto al intentar “medir lo intangible” en una sociedad en la que menos del 5% niega el cambio climático, pero existe un rechazo masivo a las infraestructuras locales.

Desde **UNEF (Unión Española Fotovoltaica)**, su directora de Relaciones Institucionales y Aceptación Social, **Laura Villaverde**, alertó sobre cómo la desinformación técnica se ha convertido en el principal motor de la oposición social organizada. Villaverde destacó que, a pesar del ruido, encuestas recientes de Sigma Dos muestran una percepción mayoritariamente positiva de la población hacia la fotovoltaica. Para contrarrestar esta barrera con rigor técnico y ganar la confianza local, destacó la implantación del Sello de Excelencia en Sostenibilidad de UNEF, que audita de forma externa el impacto socioeconómico, la economía circular y la seguridad industrial del proyecto, ofreciendo garantías a la población y a la administración. Villaverde subrayó que el objetivo final del sector debe ser interiorizar que “la aceptación social no es ni un accesorio, ni un patrocinio, ni RSC; es nuclear en la estrategia de negocio, es pura prevención de crisis”.

Piluca Núñez, directora de Comunicación de la **Asociación Empresarial Eólica (AEE)**, vinculó directamente los cuellos de botella administrativos con la frustración social. Para agilizar estos procesos sin perder el favor de la ciudadanía, reclamó la transposición de figuras legales como el “interés público superior”, ya utilizado en Alemania. Además, defendió que la aceptación social pasa por demostrar el esfuerzo tecnológico del sector para mitigar el impacto ambiental. Núñez evidenció la gran paradoja que supone que, según sus datos, “el 84% de los españoles están a favor de la construcción de nuevas instalaciones eólicas”, un apoyo que choca con el rechazo frontal al aterrizar los proyectos en el municipio. También reivindicó la capacitación de la población: “Lleguemos a los territorios y formemos a los jóvenes que se quieren dedicar al campo eólico para que puedan trabajar en la actividad eólica y que se puedan quedar además en esos municipios”.

Por parte de **Sedigas**, su secretaria general, **Naiara Ortiz de Mendibil**, aportó la perspectiva de los gases renovables, recordando que España es el tercer país con mayor potencial de Europa en biometano. Sin embargo, advirtió que “el *permitting* se puede trabajar más fácilmente... para mí el gran tema ahora es la aceptación social”, debido al rechazo preventivo por temores logísticos y técnicos, como los olores. Para superar este bloqueo, Ortiz abogó por estandarizar técnicamente la tramitación, reclamando “un 'proyecto país' para el biometano para que se pueda coordinar a todas las comunidades autónomas y que las cosas se hagan de forma estándar”. Además, insistió en que la viabilidad social de estas plantas exige una integración técnica y económica absoluta con el sector primario. “Lo importante es que los agricultores y ganaderos estén con nosotros... en Francia ha funcionado así, tiene ya 750 plantas frente a las 24 que tenemos aquí”, concluyó.

Pedro González, representante de **Aélec (Asociación de Empresas de Energía Eléctrica)**, llevó el debate hacia la competitividad industrial y recordó que la capacidad renovable de España permite proyectar “una factura eléctrica un 20% o un 30% por debajo de nuestros competidores”. No obstante, argumentó que este beneficio macroeconómico no garantiza la aceptación social local si no se construyen cadenas de valor industriales en el propio territorio. Y subrayó que para que una comunidad acepte una infraestructura, el sector debe garantizar planes de formación técnica especializada in situ, porque si los empleos de operación y mantenimiento generados por la instalación requieren perfiles técnicos que la población local no posee, se traerá mano de obra foránea, dinamitando la confianza ciudadana y la licencia social del proyecto: “si tienes la percepción de que son trabajos a los que yo no accedo porque no tengo formación y me voy a traer a gente de fuera, has perdido los fans”.

Finalmente, desde **APPA Renovables**, su director general, **José María González Moya**, alertó sobre cómo la inseguridad jurídica y el caos regulatorio están minando la relación con el territorio. Denunció la enorme presión fiscal asimétrica y advirtió que “todo eso va a engordar nuestras facturas eléctricas y hacer menos competitiva nuestra electricidad”. González Moya mostró además su preocupación por el retraso estatal en la transposición de la directiva europea sobre zonas prioritarias. Para combatir la oposición local, concluyó que el sector debe centrar su pedagogía en el rigor del análisis de alternativas, explicando claramente “las alternativas al apagón, las alternativas a que Putin o Trump nos deje de vender gas o petróleo”, haciendo comprender que la inacción tiene un coste real para la sociedad.

El factor local como eje de la descarbonización

El seminario concluyó con la intervención de María Teresa Costa, directora emérita de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la *Universitat de Barcelona*, quien aportó una visión académica al debate. Costa recordó que los proyectos que cambian el statu quo y la forma de generar riqueza siempre han generado enfrentamientos sociales. “El modelo de la descarbonización supone un compromiso con el factor local”, sentenció, advirtiendo que los ciudadanos deben sentirse actores principales del proceso: “El cambio no lo hacen otros, el cambio lo hacemos nosotros”.

Como anuncio destacado para el futuro de la investigación en este ámbito, Costa adelantó que la Cátedra ha logrado adjudicarse un proyecto del programa estatal Atrae de captación de talento. Durante tres años, el investigador alemán Andreas Löschel ha sido designado para liderar un estudio pionero sobre la conducta ciudadana frente a la transición energética aplicado a la realidad de España. Un trabajo que aportará datos científicos y metodologías probadas a este gran desafío del sector.